

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Colombia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Sandoval-P., Fabio
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-09 05:29:04
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220517

Colombia. ¿El momento de la verdad?

Sandoval-P., Fabio

Fabio Sandoval P.: Sociólogo colombiano.

En Colombia, como en todas partes, las crisis tienen determinantes económicas, sociales y políticas. Pero aquí esas causalidades tienden a diluirse en violencias que rápidamente toman ribetes de irracionalidad difícilmente reconocibles en otras latitudes. La violencia, entonces, en sí misma, se convierte en el problema central, y la pacificación en la reivindicación fundamental, aun olvidando esas determinaciones primeras.

Empero, en la crisis actual sus fundamentos políticos no han podido ser obviados. La profunda disociación existente entre el mundo institucional y la sociedad propiamente dicha no ha podido ser superada por el simple acuerdo entre el tradicional bipartidismo liberal-conservador. Esta forma de recomposición política del régimen, válida por más de 100 años, se muestra inocua en la presente situación.

Ha sucedido en los últimos 40 años que la sociedad - abandonada a su suerte y catapultada por una urbanización y capitalización ininterrumpidas - ha encontrado sus propias y discutibles formas de modernización¹, que no son ni institucional ni políticamente aprehensibles por el sistema político tradicional.

El significado de la violencia

Así se impone la elaboración de una nueva Constitución que se propone algunas cuestiones básicas. Primordialmente, el reconocimiento de los niveles de secularización social pragmáticamente alcanzados, al tiempo que la apertura de espacios para la participación política y social. Complementariamente, la institucionalización de la defensa de los derechos humanos y, obsesivamente, el control a la corrupción política. En fin, una Constitución que se hace más o menos aceptable, aun por las mentalidades más democráticas².

¹La sociedad colombiana, al lado de una impresionante iniciativa y capacidad innovadora, también ha desarrollado una profunda ambigüedad ética, derivada de su pragmatismo e individualismo extremos. De pronto, la gama del negocio ilegal, que tan bien conocemos los colombianos, sólo es la «cabeza del iceberg».

²A pesar de su naturaleza ampliamente democrática, la nueva Constitución conlleva algunas restricciones: la politización de algunas de las ramas del poder judicial (la Fiscalía Nacional), los estados de emergencia en los que disminuye muy poco el absolutismo presidencial, y, sobre todo, el estatus de las FFAA que continúa intacto.

La coyuntura constituyente se convierte, en 1991, en el cebo que permite la desmovilización de al menos el 30 por ciento de las fuerzas guerrilleras del país, y su configuración como nueva fuerza política en la Alianza Democrática-M19 (AD-M19). De manera más indirecta, al negar la extradición, también contribuye a la entrega de los «capos» del Cartel de Medellín. El país parece hacerse la ilusión de la paz y de la ampliación democrática.

Pero la violencia no amaina. A pesar de que los diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera (el 70% restante de la guerrilla) también se abren en el primer semestre de 1991, los enfrentamientos militares gobierno-guerrilla crecen en intensidad durante todo el año. Y, lo que es más grave, la supuesta apertura política tampoco frena las masacres y el asesinato de civiles. El año 1991 se cierra con la masacre de Caloto que cuesta la vida a 25 indígenas, y 1992 comienza con los 40 asesinatos de líderes comunales, sindicales y de defensores de los derechos humanos, en Barrancabermeja³.

Aún más, el vacío dejado por los grupos guerrilleros amnistiados ha sido llenado en parte por la Coordinadora Guerrillera, pero, sobre todo, por fuerzas armadas privadas compuestas por paramilitares. En esas áreas continúa la «limpieza» social y se produce el asesinato de exguerrilleros, amén de los que se obliga a retornar a la guerrilla o los que escogen el camino simple de la delincuencia común. Nada más indicativo de la vacuidad de la política de reinserción en la vida civil de exguerrilleros, que aparecía como uno de los pilares de la política de pacificación.

En este complejo contexto de la violencia, la apertura política continúa siendo un objetivo no concretado. Es más, un objetivo que parecería alejarse de acuerdo con los resultados de las elecciones de congresistas y gobernadores, el 27 de octubre de 1991. Ese día el bipartidismo tradicional se mostró «vivito y coleando» y, al contrario, la AD-M 19, que se perfilaba como la gran esperanza del cambio profundo, presentó una disminución catastrófica⁴.

De todas maneras, con todo y lo oscuro que pudiera parecer el horizonte político, la perspectiva de desarrollo y concreción de la reforma política continúa teniendo

³En la masacre de Caloto se evidencia la participación del narcotráfico en la financiación de paramilitares. Situación que parece generalizada en todo el país, con variados grados de complicidad oficial.

⁴Quizás la causa mayor del «desastre» de la AD-M19 fue su identificación, casi absoluta, con las políticas oficiales. Su incapacidad de identificarse con los sectores medios de la población, que son los que constituyen la opinión pública que viene haciéndose presente. No necesariamente su falta de identidad con los sectores populares, que, por su despolitización y por la represión que han sufrido en toda la década pasada, no tienen una actuación política significativa en estos momentos.

un asidero muy fuerte. Es el de la permanencia de la crisis política, esa profunda desinstitucionalización social que sigue sin resolverse. El bipartidismo conserva su monopolio político, pero no produce consenso. La abstención, en octubre, fue la mayor que se recuerde para elecciones de Congreso (75 por ciento), y nada indica que en las municipales de marzo de 1992 esa proporción varíe significativamente.

El régimen continúa sin superar sus crisis de legitimidad y representatividad, y ello le impide cerrarse sobre sí mismo o dar por terminado el proceso de apertura política. Más, cuando lo que de verdad se constituye en amenaza para su «estabilidad» no es la «revolución», sino la profundización de la crisis social o desintegración social, que está en la base del complejo de violencias⁵. Pero la comprensión de esta cuestión no puede dejar, ni mucho menos, de lado, las soluciones al problema guerrillero que constituye el sine qua non de todo proceso político reformista.

Si el éxito de la política «antisubversiva» se mide por la imposibilidad de la movilización y organización social y de la creación de alternativas políticas, la permanencia del conflicto gobierno-guerrilla se hace indispensable. Este, que provoca y sirve de pretexto para la existencia del paramilitarismo y la fascistización de regiones enteras, se constituye en el principal soporte de las fuerzas sociales y políticas más retardatarias, Gamonales políticos regionales, propietarios territoriales y militares de la «seguridad nacional», con algún refuerzo del narcotráfico, van ganando la «guerra» contra la movilización social y sus alternativas políticas, aunque no contra la guerrilla. Sin embargo sus costos son descomunales.

La permanencia del conflicto gobierno-guerrilla, por el conjunto de violencia que genera de manera directa o indirecta - entre las cuales las de la delincuencia común y organizada no son las menores - bloquean la necesaria modernización del régimen y de la economía. Sus costos políticos, económicos y sociales, han llegado a hacerse insostenibles. Y ello parece comprenderse en las altas cúspides del Gobierno, y, hasta cierto punto, en los sectores más poderosos y modernizantes de la economía.

⁵La situación colombiana de crisis muestra, ante todo, el fracaso de una estrategia político-militar, desde la izquierda y la derecha, que pretendía una polarización de la sociedad. Por ello la crisis no llegó a transformarse en una guerra civil, pero, por eso mismo, las soluciones políticas no pueden resolver de manera inmediata ese cruce de violencias en que finalmente desembocaron esas estrategias político-militares.

Hacia una pacificación con contenidos

Ya desde la época del desborde del narco-paramilitarismo en 1988-89, cuando se crea la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, o incluso antes cuando se fortalece la Procuraduría de la Nación en el gobierno Betancur, la Presidencia intenta frenar la militarización o criminalización de los conflictos sociales. Intenta desmotar la «política de seguridad nacional» y sus «guerras de baja intensidad», que constituyen el caldo de cultivo de todas las violencias. También los contenidos de la nueva Constitución caben dentro de esta intencionalidad.

De manera más directa el control del militarismo ha tenido un itinerario de medidas cada vez más precisas. Se creó la Consejería Presidencial de Seguridad, que en mayo de 1991 lanza su Estrategia Nacional contra la Violencia, orientada a ganar una mayor participación de las autoridades civiles y de la comunidad en los problemas de seguridad. A finales de 1991 se nombran civiles en las direcciones del Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Hasta se dice que lo mismo podría suceder en la dirección de la Policía Nacional.

Pero lo más importante se produce comenzando el año de 1992. Lo que podríamos llamar la síntesis de todos los propósitos de «civilización» y pacificación: un viraje en la concepción de los diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera.

Desde el comienzo de estos diálogos con la Coordinadora, el Gobierno, aunque en dimensiones mayores, ha pretendido repetir la experiencia de los diálogos con los anteriores grupos guerrilleros, muy debilitados militarmente. Ello, quizás, explica la resistencia de la Coordinadora a lo que veían como una desmovilización incondicional, cuando su potencial militar permanecía más o menos intacto. Podría ser también la explicación de la insistencia del Gobierno en lograr una confrontación militar decisiva y favorable, que no ha podido ser lograda a pesar de que se intentó durante todo 1991.

Al contrario, la ofensiva militar gubernamental desemboca en una contraofensiva guerrillera que «innova» destruyendo sectores importantes de la infraestructura económica, lo que antes sólo hacía circunstancialmente. Una vez más, el año pasado, se pudo constatar que en el corto y mediano plazo no puede darse un vencedor entre la guerrilla y el Gobierno. Y es este empate el que al reflejarse casi mecánicamente en las mesas de los diálogos de paz, no permite acuerdos de ninguna clase.

Ahora el Gobierno ha cambiado sus emisarios para la próxima ronda de conversaciones en México. Al sustituir a Jesús A. Bejarano por Horacio Serpa Uribe, como cabeza de la delegación gubernamental, se renueva un equipo que ya había creado fuertes resistencias en la Coordinadora Guerrillera y también en la opinión pública. Pero, por sobre todo, se trata de situar la concepción de los diálogos y de la misma pacificación, en el terreno de la política⁶. Además, Serpa Uribe es un político que - raramente, dado el descrédito de la clase política - combina una indiscutible representación del Partido Liberal gobernante donde es su tercera o cuarta figura, con una gran aceptación de la opinión pública por sus antecedentes de demócrata como ex-procurador y ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Tiene, también, la gran experiencia política de haber hecho su carrera en la ciudad de Barrancabermeja, donde parecen concentrarse todo tipo de conflictos violentos.

Paralelamente se ha creado una nueva consejería presidencial, la de Política Social y en manos de otro político de características análogas a las de Serpa Uribe: Gilberto Echeverry. Con esta nueva consejería se trata de atacar con mayor fuerza las determinantes socio-económicas de la violencia, fortaleciendo, si se quiere, el debilitado Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y la proclamada política de reinserción, creándose el Fondo Social a mediados de febrero. En palabras del Presidente, «se trata de superar el carácter residual que siempre ha tenido la política social»⁷. Se dice, ahora, que ya no se trataría solamente de reinsertar guerrilleros, sino las regiones en donde se han dado todo tipo de conflictos violentos⁸.

Quizás pueda decirse que al situarse las conversaciones de paz en la política, se sitúan en el único terreno donde se pueden dar salidas efectivas. Cuestión que parece coincidir con la supuesta agenda que la Coordinadora Guerrillera llevaría a la nueva ronda⁹.

⁶ Las conversaciones de paz, desde el gobierno sarco, han presentado una evolución que viene desde las propuestas de rendición incondicional de la guerrilla, posteriormente se pasa a las «concesiones» políticas que hace el Gobierno y a las que se acogen el M19, EPL, PRT y Quintín Lame, cuando ya han sido doblegados militarmente. Pero lo de ahora, que sería el paso al diálogo político, es prácticamente el comienzo de unos diálogos que necesariamente se extenderían hacia la profundización de reformas de tipo socio-económico. Y no necesariamente porque de la guerrilla pueda surgir una alternativa política, sino porque puede tener incidencias profundas en los propios procesos de «autorreforma» del establecimiento político.

⁷Un discurso un tanto sorprendente del presidente Gaviria en la inauguración del Fondo Social, Bogotá, 12/2/92.

⁸Estaríamos a las puertas de algo así como un Plan de Desarrollo Nacional paralelo, que, al contrario del tradicional e institucional «desde arriba», aquí se trataría de la valoración de los desarrollos «desde abajo».

⁹El famoso «cese del fuego», que aparece como el condicionante militar del debate sobre cualquier otro punto, no sería más que un aspecto como cualquier otro en la discusión.

Las determinantes macroeconómicas

Al Gobierno le urge el acuerdo de paz con la Coordinadora Guerrillera. Las inevitables consecuencias sociales negativas que se desprenden, al menos de manera inmediata, del modelo económico neoliberal en curso, podrían servir de puente a la extensión de la violencia política a las ciudades¹⁰.

Sin embargo, los efectos negativos de la modernización e internacionalización neoliberal de la economía estarían lejos de los causados en otros países. La economía colombiana siempre ha tenido un marcado tinte liberal, y el Estado ha permanecido lejos de los prototipos intervencionistas o inversionistas, y, mucho menos, ha tenido una naturaleza socialmente benefactora. Así y todo, es dable esperar un recrudescimiento de la situación social crítica que viene de atrás, que es una de las peores del continente con un 38% de «pobres absolutos», y que es la que nos tiene precisamente en la crisis en que estamos.

Se espera que el dicho modelo muestra la plenitud de sus beneficios hacia 1994, y, mientras tanto, se vienen trabajando sus condicionantes. Se acelera la modernización de la infraestructura vial y de puertos, y el enfrentamiento a la inflación y el déficit fiscal se han convertido en una obsesión de la política económica, aún a riesgo de una recesión industrial, como se vio en 1991. En consecuencia, los aumentos salariales continuarán, por segundo año, por debajo de los índices de inflación, y los despidos masivos de sectores en «reestructuración» también lo harán.

Sin embargo, 1991 presentó la sorpresa de un crecimiento del empleo. Algo que parecería inexplicable «con un crecimiento económico del dos por ciento como máximo, con producción industrial negativa, con un sector de la construcción saliendo de un largo período de crisis, con un crecimiento en el sector agropecuario jalado por empleo estacional, con un comercio sin una dinámica adecuada y con un Estado aparentemente licenciando personal, no se ve clara la conclusión de una disminución en el desempleo en Colombia»¹¹. Lo cierto es que parece haberse producido una expansión del sector de exportaciones no tradicionales, y una expansión de la pequeña y mediana empresa y hasta de ciertos sectores de la informali-

¹⁰Las ciudades colombianas son el centro de muchas violencias, y entre ellas el teatro de las actividades del narcoterrorismo. También ha habido violencia directamente política. Pero la violencia política generalizada, ha sido esencialmente rural y se corresponde con un problema agrario nunca resuelto y/o con unas regiones aisladas, en donde el Estado ha tenido una mínima presencia, excepto como represor.

¹¹Angel Carlos Arturo, presidente de la ANDI (gremio de industriales): «¿De dónde más empleo?» en Revista Semana N° 510, 2/1992.

dad económica¹². De todas maneras parece difícil la repetición de la sorpresa en este año, cuando se prevé una aceleración de los despidos masivos, aunque las expectativas del crecimiento económico son mejores¹³

Con estos desarrollos macroeconómicos tan ambiguos, por decir lo menos, ¿qué es lo que impulsa al presidente Gaviria a hablar del «milagro» colombiano?¹⁴ Son las expectativas del crecimiento económico en el muy mediano y largo plazos. Y son, quizás, estas expectativas las que también explican la «generosidad» gubernamental en la nueva ronda de los diálogos de paz.

Como todo problema inflacionario, el colombiano se explica por un exceso de la oferta monetaria que no encuentra su correspondencia en la oferta de bienes y servicios. Pero - y eso es lo particular - la oferta monetaria colombiana aparece respaldada por una avalancha de dólares¹⁵. Si a esto se le suman los descubrimientos de petróleo que convertirán al país en uno de los principales exportadores de América en el término de dos años, no cabe duda de que el país habrá superado el recurrente problema de la escasez de divisas.

Pero todo esto apenas si pone de manifiesto que el problema de fondo de estas economías es el de su «reconversión» productiva. ¿Cómo transformar esos dólares en capitales productivos? ¿Cómo superar sus «tendencias» puramente especulativas?, en fin: ¿cómo evitar que la apertura económica termine en simple apertura comercial que acabaría de «destripar» la economía productiva del país? El ex-candidato presidencial Gómez Hurtado ha dicho que el ministro de Hacienda Rudolf Hommes «puede pasar a la historia por ser el único ministro de Hacienda que se ha ahogado en un mar de dólares».

Entretanto «lo social» tiende a agravarse, la única previsión que el Gobierno parece haber tomado son las inversiones en salud, educación y agua potable, que contempla el Plan de Desarrollo Nacional, calculadas sobre la base de una supuesta recuperación fiscal. Y todo ello mientras que la «guerra» no exija nuevos y más urgentes gastos.

¹²Ibid.

¹³En ello coinciden todos los analistas, pero son especialmente llamativas las predicciones del economista Salomón Kalmanovitz (un crítico permanente de las políticas económicas oficiales), que espera un crecimiento «varias veces el que se dio en 1991», *El Espectador*, 12/1/92.

¹⁴El discurso de Gaviria en Davos, (Suiza) 2/1992.

¹⁵Dólares provenientes de las exportaciones, de la repatriación de capitales legales e ilegales, ante la amnistía que dio el gobierno, desde comienzos del año 1991.

Como la esperanza es lo último que se pierde, podría suceder que el mismo viraje que se prevé en las políticas de pacificación, sobre todo, por la creación de la Consejería de Política Social, evolucione hacia una auténtica política social de tipo nacional. Que incluso lograra penetrar un poco más a fondo en las determinantes socioeconómicas de la crisis. Que asumiera, en algo, la problemática agrario-campesina y la de los sectores informales de la economía urbana, etc.

En ello podría estar pesando - se dice - las muy ricas experiencias de nuestros sectores «marginados» que han construido medio país, y, también, las desastrosas de nuestro vecino, Venezuela.

Comentario Final

Al contrario de su predecesor, el presidente César Gaviria toma decisiones en todos los campos. Sólo por ello, su popularidad sigue arriba.

La nueva Constitución, la política de entrega de los narcotraficantes, la apertura económica, el Plan de Desarrollo, el arancel andino común, el «mini» liderazgo del país en los procesos de integración regional (Grupo de los Tres, Pacto Andino, Acuerdo de Río, etc.) son todas iniciativas conducidas bajo la tutela presidencial. Si de la retórica se tratara, es probable que ya no tuviéramos problemas.

Cierto que tampoco se trata de una retórica puramente demagógica. En realidad existen planes y proyectos de mediano y largo plazo, pero que - por el contexto de violencias y de la profunda crisis social - aparecen como simples enunciados, en parte contradictorios con las posibles soluciones.

Es en la concreción de esos enunciados en donde se juega el prestigio del Presidente y la suerte del país. Para ello, sin embargo, habrá que superar los problemas de la violencia y de la inseguridad, de la manera más inmediata posible.

Referencias

*Arturo, Angel C., REVISTA SEMANA. 510 - 1992; ¿De dónde más empleo?

*Kalmanovitz, Salomón, EL ESPECTADOR-PRENSA. 12/1 - 1992.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 118 Marzo- Abril de 1992, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.